

EL SOCIALISTA

238

Centroamericano



Primera Quincena
Abril 2017

Guatemala: Q 4.00
Honduras: L 12.00
El Salvador: US\$ 0.60
Nicaragua: C\$ 10.00
Costa Rica: ₡ 500.00

"Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroamericana"

www.elsoca.org

www.facebook.com/elsoca.org

www.twitter.com/elsocca



!DETENER LA OFENSIVA DEL IMPERIALISMO!

* ATAQUES MILITARES EN SIRIA

* OFENSIVA DIPLOMÁTICA DE LA OEA EN AMÉRICA LATINA

* ATAQUES CONTRA LOS TRABAJADORES INDOCUMENTADOS EN ESTADOS UNIDOS



HONDURAS.- LA SITUACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CARRERAS EN LA UNAH, O LA POLÍTICA DEL DIVIDE Y VENCERÁS



GUATEMALA.- La ministra de salud muestra su faceta represiva



EL SALVADOR.- ATRAMEC y la lucha de los trabajadores de los CED



NICARAGUA.- NICA ACT II redoblan las presiones contra el gobierno

DETENER LA OFENSIVA IMPERIALISTA DE TRUMP

A pocas semanas de haber asumido la presidencia de Estados Unidos, el multimillonario Donald Trump está desarrollando una ofensiva en todos los ámbitos para recuperar la hegemonía indiscutible del imperialismo norteamericano en el mundo.

Comenzó con la revisión de los tratados de libre comercio, retiró a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, amenazó con retirarse del NAFTA para obligar a México a una renegociación del mismo, la que ya está en marcha.

Inmediatamente después, a pesar de criticar el histórico déficit fiscal y el endeudamiento de las administraciones anteriores, aumentó considerablemente los gastos militares, con el objetivo de devolver la supremacía militar a Estados Unidos, lo que incluye la renovación de su arsenal nuclear. Su argumento central es que la fabricación de armamentos con tecnología avanzada creará nuevas fuentes de empleo para los trabajadores norteamericanos. Manipulando uno de las justas aspiraciones de ese proletariado que también ha sido víctima de la globalización capitalista.

A pesar de su coqueteo con Rusia, Trump acaba de ordenar el bombardeo con misiles de un aeropuerto militar en Siria, un aliado de Rusia, con el pretexto que la dictadura de Assad utilizó armas químicas contra civiles indefensos. No debemos descartar que efectivamente Assad haya utilizado este tipo de armas contra los civiles que apoyan a los insurgentes, pero también debemos estar claros que cada vez que el imperialismo desata un ataque militar contra cualquier país, en cualquier parte del mundo, monta una campaña de mentiras y desinformación precisamente para justificar esos ataques militares. Así pasó en Irak cuando se dijo que la dictadura de Sadam Hussein tenía armas de destrucción masiva, y al final resultado que fue una mentira cuidadosamente difundida en los medios de comunicación para atraerse a la opinión pública a su favor.

Trump ha superado las vacilaciones de Obama y ha decidido intervenir en la guerra civil siria, restándole capacidad de ataques aéreos a la dictadura de Assad, la que se perfila como triunfadora. Estos ataques militares están destinados a obligar a Rusia a una renegociación del destino de Siria, presionar militarmente a Irán y alentar el ejército sionista de Israel a aventurarse a cualquier tipo de ataque contra el eje chiita que representan Líbano, Siria e Irán, aliados de Rusia.

Trump ha sentado el precedente, como lo hizo en su momento Ronald Reagan, de poder atacar cualquier objetivo, en cualquier país, sin necesidad de recurrir a organismos inservibles como la ONU.

En América Latina, Estados Unidos intenta, a toda costa, recuperar la hegemonía perdida. Por el momento no se vislumbran ataques militares, pero el almirante Kurt W.Tidd, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, acaba de brindar un peligroso informe anunciado que "la creciente crisis humanitaria en Venezuela podría obligar a una respuesta regional".

Trump pretende arrodillar a México en la renegociación del NAFTA, pero al mismo tiempo está librando una gran ofensiva política contra los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), centralmente contra el gobierno de Venezuela que está acosado por una pavorosa crisis económica, producto de la caída del precio del petróleo, y por el estallido de la indignación social.

La punta de lanza de esta ofensiva la desarrolla la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual mantiene tácticas diferentes ante Venezuela y Nicaragua, dos países miembros del ALBA. En el caso de Nicaragua, la OEA mantiene una posición conciliadora, a pesar que en el Congreso de Estados Unidos se acaba de poner en marcha una nueva versión de la NICA ACT.

Detrás de esta ofensiva, está el aislamiento de Cuba, un tema que la administración Trump pretende resolver a la brevedad posible. Lamentamos que, ante la ofensiva imperialista, Venezuela y Nicaragua, aunque las situaciones son diferentes, han optado por buscar cada quien el salvamiento individual, y no la lucha conjunta, como había soñado Chávez.

Solo los trabajadores, con sus propios partidos y organizaciones, actuando de manera independiente, pueden sostener con firmeza la bandera de la lucha antiimperialista que es la otra cara de la lucha contra el capitalismo. ■

EL SOCIALISTA
Centroamericano

ESCA No. 238
Primera Quincena
de Abril 2017

Impresión:
11 de Abril de 2017

DIRECTOR:

Victoriano Sánchez

CONSEJO EDITORIAL:

Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Maximiliano Cavalera,
Gerson de la Rosa,
Eduardo Villalobos,
José Manuel Flores Arguijo
(in Memoriam).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS

www.elsoca.org
facebook.com/elsoca.org
twitter.com/elsoca

Redacción:

elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:

psoca@elsoca.org

Secciones:

psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org

EL SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
es una publicación del
PARTIDO SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
(PSOCA).

fundado y reconstituido
el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos:
una versión digital que se
actualiza diariamente
(www.elsoca.org) y otra
versión impresa que se publica
quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la opinión
editorial del **PSOCA**, sino la
exclusiva responsabilidad de sus
autores.



EXITOSA MARCHA INDEPENDIENTE EN CONTRA DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Por Víctor Carranza

El pasado 31 de marzo organizaciones sindicales de trabajadores públicos y privados populares y de trabajadores por cuenta propia se movilizaron en una multitudinaria marcha que partió desde el monumento conocido como El Salvador del Mundo hacia casa presidencial. En dicha movilización las organizaciones manifestaron su descontento contra las medidas anti obreras y anti populares realizadas por el actual gobierno. En la marcha también participaron los ex combatientes del FMLN y desmovilizados de la Fuerza armada, miembros de la PNC, y miembros de la empresa privada.

Como era de esperarse la unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC impidió el paso a la movilización para que esta no llegara a casa presidencial el cual era el destino final. El gobierno usa la UMO contra los trabajadores, pero con la derecha arenera es todo lo contrario la llama a dialogar y les abre la puerta de casa presidencial.

No a las recetas del FMI

Las organizaciones sindicales se manifestaron en contra del paquetazo fiscal impuesto por el FMI al gobierno del FMLN quien sin mayor resistencia lo está ejecutando parte de ello son los recortes de los subsidios al agua y energía eléctrica, transporte, etc. Así como la propuesta del FMI de aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) de un 13% aun 15%. Francisco Zelada de SIMEDUCO manifestó que: “la política de eliminación de los subsidios merece todo el rechazo de la población, porque el Gobierno está cumpliendo con el paquetazo impulsando el por el FMI y el BM”...Son muchos los sectores que están descontentos con la forma de administración de este presidente y nosotros somos la voz de aquellos que no pueden salir a la calle a protestar en contra de este Gobierno que

no los escucha...”(DEM.01/04/17).

Las medidas ejecutadas por el gobierno afectan a la clase trabajadora, ya que el salario mínimo actual que recibe la



gran mayoría de trabajadores ni siquiera alcanza para cubrir el costo de la canasta básica. Lo anterior nos lleva a exigir una nivelación salarial y aumento al salario mínimo. Así mismo debemos exigir que se continúe manteniendo el subsidio para todos los trabajadores y que los servicios básicos como agua, electricidad, transporte, sean renacionalizados y que pasen al control de los trabajadores.

Gobierno ahorra en detrimento de los trabajadores

Lo más fuerte de la movilización estuvo compuesto por las diferentes organizaciones sindicales y trabajadores públicos quienes inicialmente han sido los más afectados por los planes de austeridad del actual gobierno, quienes se manifestaron en contra de la política de ahorro que está implementando el gobierno ya que ha perjudicado enormemente mediante recortes presupuestarios a muchas instituciones, quitando algunos beneficios que se habían conquistado. Al respecto Silvia Navarrete de SITRASALUD manifestó: “Salvador Sánchez Cerén, no escucha a la clase trabajadora ni vela por los intereses de un pueblo que sufre por

las malas decisiones que toman para solucionar los graves problemas del país...Le exigimos al señor presidente que no se implementen más medidas que afecten la economía de la población salvadoreña...”(DEM.01/04/17).

Mientras los trabajadores operativos sufren las medidas los altos funcionarios continúan recibiendo jugosos salarios y grandes prestaciones. Se debe luchar y exigir que los altos funcionarios del gobierno sean quienes verdaderamente carguen la crisis que sus salarios sean reducidos y que se eliminen los privilegios.

Por la unidad y la independencia de clase

Antes de 31 de marzo también se había dado una movilización con las diferencias que una parte de los dirigentes de esta movilización todavía tienen la confianza depositada o dan el beneficio de la duda a la dirección del FMLN. Se debe diferenciar entre lo que son las direcciones oportunistas y aquella direcciones que aun habiendo marchado el 30 mantiene una posición crítica hacia el gobierno pero que la confusión deliberadamente realizada por la dirección del FMLN no les permite romper con la dirección del FMLN y el gobierno.

El FMLN como partido busca desvirtuar la marcha del 31 haciéndola ver como una marcha desestabilizadora promovida por la derecha, se le olvida que dichas movilizaciones son producto de las medidas impulsadas por ellos mismos como gobierno y una reacción lógica de los trabajadores es luchar en defensa de los intereses propios como clase trabajadora independientemente de las preferencias partidarias. La movilización del 31 ha dejado claro que si es posible la unidad de todos los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Se debe continuar luchando en unidad y con independencia de clase.



LA SITUACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CARRERAS EN LA UNAH, O LA POLÍTICA DEL DIVIDE Y VENCERÁS

Por Horacio Villegas y Mateo Raudales

El movimiento estudiantil universitario (MEU) logró en el 2016, granjearse del acompañamiento indispensable de la mayoría de asociaciones de carrera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); esta fórmula organizativa se tradujo en un permanente forcejeo entre el movimiento y las autoridades que desembocó en un apremiante acuerdo, semejante obstáculo sin duda. Las asociaciones de carrera sencillamente eran el baluarte más provisto de claridad al momento de hacer expuestos los reclamos, decisiones y propuestas en el movimiento estudiantil.

La dinámica de la lucha en el 2016 fue necesariamente el producto de años de organización acumulados, y una fuerte labor de ensayos democráticos en los espacios de participación de cada una de las carreras. Los estudiantes protagonistas de las huelgas, aquellos que encarnaron cada uno de los principios afines a su organización más cercana como las asociaciones, no dudaron en cerrar filas en una misma determinación colectiva: el peso de sus asambleas reunidas bajo el criterio de la construcción de propuestas, ampliamente discutidas.

De manera que el MEU se debió a estos espacios organizados de estudiantes que volvieron realizable la plausible toma del 1 de junio hasta el 28 de julio de las instalaciones de la Universidad, que llevó al inicio de un momento aprovechable para el reclamo de representación estudiantil en los espacios políticos y académicos de la Universidad.

Los acuerdos del 28 de julio del 2016 desataron una suerte de inmovilismo en los estudiantes y trajeron consigo una serie de intervenciones jurídicas de parte de los sectores más reformistas y conciliadores a secas —estudiantes de

derecho e ingenierías, entre otros; desde entonces el MEU se ha convertido en una especie de cuerpo desmembrado que ya no sugiere el replanteamiento de la lucha estudiantil, pues ha interesado más el



“papeleo” en vez de elaborar estrategias que vuelvan atrayente un proyecto a largo plazo.

Las asociaciones de carreras hoy: ¿la vanguardia del movimiento estudiantil o espacios captados por las autoridades?

En este contexto desastroso se enmarcan hoy las asociaciones de carrera; a éstas han llegado recientemente convulsiones quizá planificadas en el buró de las autoridades. Es crucial para la rectoría y varias decanaturas y jefaturas serviles, dismantelar los espacios organizados por los estudiantes: boicotear los procesos electorales dentro de las asociaciones; generar conflictos que orientan a la enemistad y oposiciones declaradas sin sentido; y de fondo, se trata de la franca aniquilación de los espacios que dieron vida al proyecto casi victorioso llamado “MEU”.

Proponemos a los compañeros que comparten el espacio de las asociaciones estudiantiles, no dejarse arrebatar sus conquistas tan bien logradas como sus reglamentaciones internas y estatutos, pues bajo el falso motivo de “reforma” se puede traicionar la voluntad colectiva

que vio nacer —en años consecutivos— estos consensos de naturaleza política. La debilidad que el MEU refleja en la actualidad es motivo suficiente para que se levanten los sectores más manipulables de las carreras, con el vil ánimo de despedazar el sentido más político que reside en las asociaciones: el valor de asumir posturas que cuestionan el proyecto de universidad bajo el gobierno de las pasadas y actuales autoridades, además de debatir y consensuar ágilmente posiciones que reniegan de la enferma situación nacional, bajo el mando corrupto de los gobiernos de turno.

El congreso estudiantil universitario, o el supuesto remedio que devolverá la fuerza al MEU

“El pasado lleva consigo un índice temporal mediante el cual queda remitido a la redención. Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Y como a cada generación que vivió antes que nosotros, nos ha sido dada una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos.” Así concluye Walter Benjamín su segunda tesis sobre la filosofía de la historia, obra publicada al castellano póstumamente en 1959, y que recuerda una tarea un tanto nublada en nuestro tiempo, el tiempo de la incertidumbre, de lo reducible, el tiempo de los fragmentos.

Como todas las generaciones, la nuestra se sitúa radicalmente en su tiempo, y no es de ninguna forma homogénea en espacio. En 1968 una generación estudiantil explotaba desde Francia hasta Argentina, y desde México hasta Praga; como proceso de larga duración, los estudiantes de la década de 1960 representaron la negación de los principios, formas y contenidos legados por una generación que, con el culmine de dos guerras mundiales en 1945, arrastraban la más profunda crisis de la



modernidad occidental, vanagloriada por el “progreso”, la “civilización”, la “razón” y la “felicidad”. Ésta, como cualquier otra, no construyó su posibilidad como generación fuera de la historia: se alimentó de su pasado, de sus errores, de sus hombres y mujeres, de sus memorias y raíces.

Aquella “cita” de la que nos habla Benjamin no es, ni podrá ser nunca un encuentro “flemático”, una especie de reconciliación apaciguada por un tiempo continuo y lineal. Más bien, como todo proceso humano, constituye un momento de conflicto donde no siempre la generación presente puede alegar ventajas, resistencia o transformación, sino que la voz enterrada del pasado también revuelve violentamente las conciencias hasta aplastar -en el inevitable andar del tiempo- nuestra apacible espera de un futuro mejor soñando en los laureles de la neutralidad, inacción, el silencio y la complicidad.

El MEU hoy se alimenta de sus propias culpas. Se sostiene como un pulpo que extiende agonizante sus tentáculos, aferrándose a fuerzas y condiciones que ni su muy anónima dirigencia de litigantes puede comprender se desvanecieron con la firma de los acuerdos del 28 de julio en 2016. Un Congreso, el “Primer Congreso Estudiantil: Eduardo Becerra lanza”, parece ser su salvación. Sin ninguna intención auténtica de crítica o reestructuración, se continúa exaltando la plataforma del MEU como un espacio que, al margen del conflicto con nuestra realidad, podrá impulsar el cambio que nuestra UNAH y Honduras tanto necesitan; parangonando al héroe patriarcal que aguarda se acabe el berrinche de sus súbditos para acudir a su ineludible salvación, el MEU aguarda al Congreso para limpiar sus demonios y los terribles episodios de inmovilización que derrumbaron procesos acumulados de organización y formación estudiantil desde el Golpe de Estado de 2009, por la comodidad burocrática de “arreglos” con las autoridades que, según ellos, irán de la mano para corregir más diez años de Reforma Universitaria, enmarcada en un proceso de reajuste económico y político desde la década de 1980.

A la espera del Congreso, las asociaciones agonizan supeditadas a una plataforma que reniega la crítica, la discusión y hasta de los principios

lucha que legaron una generación que derramó su sangre en la espera de una época que se fue con el siglo y con sus grandes discursos. Tan miope de su pasado, o más bien, tan absurdamente obstinado de negarlo sin ningún carácter ético o político, desde la “dirigencia” de papel del MEU se sobresaltan entusiastas al proponer un Congreso que impida la infiltración de actores externos, reivindicando, sin embargo, la figura de Eduardo Becerra Lanza, estudiante y mártir en los 80’s por su filiación a la fuerza ideológica revolucionaria que atravesó a Centroamérica con las guerrillas, desde la formación de las vanguardias (en aquel período) de los Partidos Comunistas y el resguardo del bloque soviético en el contexto de la Guerra Fría.

En el 18 brumario de Luis Bonaparte Karl Marx escribía: “La historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa”. La comedia se agotó para el MEU. Con el fracaso del consenso del REE y su subordinación a la política de los frentes, la ausencia de unas Normas Académicas consensuadas por estudiantes-docentes-autoridades y una dirigencia incapaz de generar cohesión o suficiente nivel propagandístico que eleve los objetivos de un “Congreso Estudiantil” a verdaderas y reconocidas necesidades de los y la estudiantes, el MEU pasó de bufón con los Frentes -al boicotear éstos sus intentos de elecciones en el 2016- a representar el mayor cómplice de la desarticulación de la autonomía de las Asociaciones de Carrera, la consolidación de la Reforma Universitaria y el pasivo rol de la “Máxima Casa de Estudios” con la crisis nacional.

Del Congreso se espera una transformación que destruya las antiguas estructuras de la plataforma del MEU para construir desde la comunidad estudiantil y popular un sentido humano de la universidad, una academia que pueda proponer, construir y defender multisectorialmente una resistencia al control y destrucción de la naturaleza, el conocimiento, los saberes, los cuerpos y el trabajo. A la “espera” de realizarse tan eufórica utopía, surge expectativa de la extraordinaria “revolución” de una tragedia consumada.

El congreso de estudiantes

“Eduardo Becerra Lanza”: hacia un contenido que dé cuenta de la realidad y abandone cualquier tipo de lucubración

El congreso de estudiantes según lo han planteado sus organizadores invoca la gesta rebelde y memorable de Eduardo Becerra Lanza, el joven que oportunamente se negó a guardar silencio por los actos nefastos que los militares encabezaban en la década de los ochentas; su desaparecimiento y el de muchos estudiantes debilitó enormemente a la generación que pudo salir un momento de las aulas universitarias y enfrentarse a la agobiante situación del país, ya carcomido por el intervencionismo norteamericano por un lado y la “doctrina de seguridad nacional”.

Un congreso de estudiantes que ovaciona el nombre del compañero Eduardo Becerra, supone—así lo creemos—un contenido de fondo: reivindicar la vigencia de su lucha política, que no es otra cosa que desasirse del pupitre y arremeter, sin excusa alguna, contra las formas entreguistas de los gobiernos de turno. A Eduardo Becerra le contarían estas posturas, el desagrado del entonces rector Oswaldo Ramos Soto.

El MEU no consiguió en sus moribundas discusiones darse cuenta de lo lejos que está el contenido de su congreso de la memoria del personaje que utilizan como denominativo. Quizá por dos simples razones: el movimiento, o la cúpula que sobrellevó la dirección de éste, no logró concebir acciones que dieran el salto a los problemas agudos del país, solamente logró enquistarse en la liviandad que supuso la revisión de la normativa académica y la participación estudiantil en espacios burocráticos de la universidad.

Lastimosamente el MEU ni siquiera coincide hoy con la franca oposición evidente entre rectoría y la generación de Eduardo Becerra Lanza en aquellos días; seguramente el congreso llevará irremediamente a una penosa conciliación entre el movimiento y las autoridades. Con todas estas situaciones incontrastables, parece ser que no se le podrá hacer justicia a la memoria del compañero Eduardo Becerra Lanza en este exiguo congreso estudiantil. ■



ANTE LAS NUEVAS PROTESTAS:

LA MINISTRA DE SALUD MOSTRÓ SU FACETA REPRESIVA

Por Armando Tezucún

Los trabajadores salubristas pertenecientes al mayoritario Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), volvieron a tomarse las carreteras del país el pasado 23 de marzo y nuevamente el 6 de abril; durante la última semana de marzo mantuvieron un plantón frente a la Casa Presidencial. Al igual que en las acciones realizadas dos semanas antes, las compañeras y compañeros defendieron el pacto colectivo contra los ataques de la ministra Lucrecia Hernández Mack, y pidieron su renuncia.

Por otro lado, el 24 de marzo y el 5 de abril, en sendas conferencias de prensa, médicos de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt denunciaron las malas condiciones en que se encuentra dicho centro y pidieron al Ministerio de Salud mejores condiciones laborales, entre ellas aumento salarial. Los médicos dijeron que han tratado de entablar un diálogo con la ministra Hernández, pero que no les ha dado audiencia. Zagreb Zea, presidente de la Junta, declaró: “Nos quedamos constantemente sin insumos y aparte de todo se nos exige de parte de nuestras autoridades ministeriales y se nos da muy poco a cambio. Lo que queremos es dialogar directamente con la Ministra para una búsqueda de dignificación, tanto laboral como salarial...nuestro salario base es de Q 1,762.40. Nosotros llegamos a Q 5 mil con los bonos que se nos dan” (La Hora 24/03/17). El 5 de abril explicaron que piden la instalación de una mesa técnica que incluya a la ministra Hernández; la demanda planteada es que su salario sea aumentado a 8 sueldos mínimos (La Hora 05/04/17). Dejaron en claro que no tienen intención de realizar paros ni suspender servicios y se desligaron de la lucha que llevan a cabo los trabajadores de salud en defensa de su pacto colectivo.

La ministra, por su parte,

puso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el SNTSG, por haber vulnerado el derecho a la salud de la población, al haber realizado paros y cierres de consultas durante los recientes bloqueos de carreteras. El día 28 el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Civil otorgó el amparo, y ordenó a los sindicalistas “...que se abstengan y/o desistan inmediatamente del bloqueo, cierre, toma de instalaciones,



paralización de actividades operativas y administrativas, y obstaculización en el ingreso de autoridades, personal y usuarios de los servicios de salud a las distintas unidades que integran la red hospitalaria (Prensa Libre 30/03/17). La ministra acusó a los compañeros de haber dejado de atender 700 mil consultas durante las protestas, de desconectar interruptores eléctricos centrales y dejar sin energía cuartos fríos que contienen vacunas; de nuevo Hernández recurrió al aparato represivo del Estado, poniendo una denuncia ante el Ministerio Público (Prensa Libre 05/04/17).

Luis Alpírez, dirigente sindical, negó que el sindicato ordenara esas acciones y dijo: “Lo que quieren es penalizar el conflicto. Están inventando cualquier patraña para penalizarnos a nosotros como dirigentes o a los trabajadores que legítimamente estamos haciendo resistencia de cualquier manera para

reivindicar nuestros derechos...Esta es una estrategia que utilizó Mariano Rayo (exministro de salud en el gobierno de transición del expresidente Alejandro Maldonado y exdiputado por el Partido Unionista del alcalde capitalino Álvaro Arzú), de quien ella está recibiendo asesoría directa” (Ídem).

La ministra Hernández se ha colocado abiertamente en contra de los beneficios conquistados por los trabajadores salubristas en el pacto colectivo, recurriendo a las instancias represivas del Estado burgués, con el apoyo de los medios de comunicación de derecha y de la intelectualidad políticamente conservadora.

Llamamos a los compañeros sindicalistas de salud a no dejarse intimidar y continuar con las medidas de lucha en defensa del pacto colectivo. Si bien los ataques han sido contra los compañeros del SNTSG, el resto de sindicatos del área deben solidarizarse, pues esta es una ofensiva en contra de todos los pactos en salud y más allá, contra las condiciones de trabajo de los trabajadores estatales. Llamamos también a los compañeros médicos a que depongan su actitud gremialista y se solidaricen con la lucha de los sindicatos de salubristas; al igual que ellos, su salario base no llega ni al mínimo de ley, si no fuera por los bonos serían sueldos verdaderamente miserables. La unidad de todos los trabajadores de salud es vital en estos momentos. Si los pactos colectivos implican privilegios de cualquier tipo para los dirigentes, en alguno de sus puntos, las compañeras y compañeros trabajadores deben exigir aclaración y rendición de cuentas en asambleas de base libres y democráticas, pidiendo la destitución inmediata de cualquier líder que incurra en faltas y manejos oscuros.





SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS PROYECTOS OXEC EN ALTA VERAPAZ!

¡CESE A LA PERSECUCIÓN CONTRA BERNARDO CAAL!

¡Por Úrsula Pop

El 22 de marzo, decenas de miembros de comunidades de Alta Verapaz realizaron una marcha de protesta en la capital, contra la autorización y funcionamiento de los proyectos hidroeléctricos Oxec 1 y 2, pues como consecuencia de su operación ha disminuido el caudal de los ríos y los mismos han sido contaminados; esto

además de que no se realizó una consulta comunitaria antes de que fueran autorizados. Al llegar a la Corte de Constitucionalidad, los compañeros entregaron una petición para que se cumplan los plazos de ley y se otorgue en definitivo el amparo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena detener los proyectos Oxec en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

El día siguiente, otra marcha de pobladores de Alta Verapaz llegó a la CC a demandar

que se levante la suspensión contra el funcionamiento de estas hidroeléctricas, entregando un memorial con la firma de 2 mil personas. Estos pobladores procedían de once comunidades de la región, y defendieron a las empresas diciendo que les han llevado empleo y desarrollo, beneficiándose de las regalías entregadas por la empresa, y pidiendo que continúen los trabajos de estos proyectos.

Los antecedentes de estas acciones podemos situarlos en noviembre de 2016, cuando la CSJ suspendió las operaciones de las hidroeléctricas, luego de que las comunidades presentaran una acción legal contra el Ministerio de Energía y Minas por haber autorizado su funcionamiento en 2015; el 4 de enero de 2017 la misma corte otorgó un amparo a favor de los comunitarios de Santa María Cahabón, quienes adversan la construcción de las hidroeléctricas porque no se realizó

la debida consulta comunitaria; el 17 de febrero del presente año, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó la suspensión temporal del proyecto Oxec.

Esta última resolución desató una ola de protestas de las organizaciones empresariales. En primer lugar de la Asociación de Generadores de Energías Renovables (AGER), apoyada por la Cámara de Industria de Guatemala y los



presidentes de la Autoridad del Mercado Mayoritario y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNNE). Estos empresarios advirtieron que los precios de la energía eléctrica se elevarían con la suspensión de los proyectos, pues los costos de producción se dispararían. Esta amenaza es falsa, pues según datos oficiales, hasta el año pasado había una sobreproducción de electricidad en el país, y además las plantas suspendidas aún no han empezado a producir. En realidad, los empresarios realizaron una consulta, pero con un grupo reducido de pobladores que están vinculados a las hidroeléctricas, quienes dieron su aprobación, sin deliberar con la mayoría de la población (CMI 24/02/17, "Potencial Cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Oxec Causa Reacciones Perversas").

En los proyectos Oxec están involucrados poderosos intereses

empresariales nacionales y extranjeros. Pertenecen al grupo Energy Resources Capital Corp., registrado en Panamá, que tiene varios proyectos hidroeléctricos en el país; su presidente es un empresario agroexportador, y uno de los fundadores del Banco de Exportación, que se fusionó en el Banco G&T Continental; es socio de la empresa de cerámica Samboro fundada por la familia Ayau, también propietarios y constructores de hidroeléctricas.

En Oxec participa también el grupo español Cobra, socio, en la construcción de otras hidroeléctricas, de la Corporación Multi Inversiones, de la familia Bosch Gutiérrez, una de las más poderosas del país (CMI, Íbid).

El día 21 de marzo la Asociación de Amigos del País presentó ante la CC un memorial Amicus Curiae, para reforzar la presión a favor los mencionados proyectos hidroeléctricos, que han sido suspendidos. Esta asociación es una entidad centenaria, que aglutina a los más rancios poderes oligárquicos y élites empresariales, considerada la máxima instancia de las clases dominantes en Guatemala (CMI 21/03/17).

Con tantos intereses afectados, la represión del gobierno contra los compañeros comunitarios no tardó en aparecer. El 27 de marzo un juez de Alta Verapaz, a petición del Ministerio Público, ordenó la captura del dirigente comunitario de Santa María Cahabón, Bernardo Caal Xol. Caal es también dirigente magisterial del Magisterio en Resistencia. No pudiendo asirse de otra cosa, las instancias represivas acusan al compañero de haberse ausentado durante 20 meses, entre enero de 2012 y agosto de 2013, a su puesto como docente en una escuela del lugar, y de haber cobrado alrededor de Q 104 mil. Por este asunto fue destituido por el Ministerio de Educación en agosto de 2013. El compañero Caal hasta el momento permanece oculto. ■

QUE LOS DUEÑOS DE LAS GRANDES EMPRESAS NACIONALES Y TRANSNACIONALES PAGUEN LA CRISIS FISCAL

El bajo crecimiento económico, el endeudamiento y la crisis fiscal que deriva en falta de recursos financieros para el funcionamiento del Estado se ha agudizado, dicha crisis es producto de las medidas neoliberales, las políticas privatizadoras, los robos realizados en los diferentes gobiernos y los saqueos realizados por las potencias imperialista.

Unido a lo anterior están los boicots realizados por la derecha arenera que busca frenarle toda fuente de financiamiento al actual gobierno, por otra parte, está la falta de políticas del gobierno del FMLN para hacer que los ricos paguen la crisis y los compromisos del FMLN con la rancia oligarquía, el imperialismo y los organismos financieros internacionales.

Ante la agudización de la crisis el gobierno busca darle una salida, aplicando las recetas dadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el tradicional empresariado salvadoreño dichas medidas buscan reducir el gasto público lo cual afecta a los trabajadores públicos y al pueblo en general dentro de esas medidas están: la eliminación de incentivos económicos a los trabajadores públicos como lo es el escalafón en salud, congelamiento de plazas operativas en salud y educación, eliminación al subsidio del agua, energía eléctrica, gas y la reprivatización del sistema de pensiones. Dichos organismos financieros internacionales buscan asegurar que el gobierno tenga fondos para el pago de los préstamos contraídos y la dependencia económica del Estado salvadoreño.

Las organizaciones sindicales de trabajadores públicos ya han dado muestra de luchas de resistencia contra estas medidas lo que les ha llevado a buscar la unidad la cual debe continuar fortaleciéndose, pero todavía no se ha logrado parar las medidas anti obreras y antipopulares del gobierno, así como la crisis fiscal.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que la crisis la deben pagar quienes

la causaron para ello como medidas que aseguren la entrada de recursos financieros al estado los trabajadores y organizaciones sindicales debemos exigir: Que los grandes empresarios paguen impuestos, renacionalización de la banca, telecomunicación, distribución de energía eléctrica y del sistema de transporte público incluido el SITRAMSS, eliminación de la partida secreta o gastos reservados



del gobierno central, reducción de salarios para los funcionarios de alto nivel, no más privilegios para los altos funcionarios.

Así mismo, como PSOCA consideramos que todas las organizaciones sindicales de trabajadores públicos y privados debemos trabajar en la unidad de todos los sindicatos y una alianza obrera, campesina y popular. De igual manera luchar también por la independencia política y la democracia obrera dentro de los sindicatos y centrales obreras y campesinas, no se debe tener ninguna confianza en partidos burgueses tradicionales ni en los partidos de la burguesía emergente.

El PSOCA llama a luchar unidos por:

- Aumento general de salarios y nivelación salarial de los trabajadores públicos y privados.
- Defensa de la seguridad social debemos volver al esquema de seguridad social clásica, donde el Estado y la patronal aporten las mayores contribuciones para las pensiones de los trabajadores. Se debe

terminar con las AFP.

- Defensa y ampliación de los contratos colectivos de los trabajadores del sector público y del sector privado.
- Que el estado destine fondos para garantizarle al pueblo salvadoreño servicios básicos de salud y educación y la seguridad social.
- No al congelamiento de plazas ya que ello implica una recarga laboral.
- Renacionalización de servicios de agua, energía eléctrica, transporte y otros servicios ya que de esa manera se puede asegurar un cobro justo.
- Terminar con las subcontrataciones de servicios en las instituciones públicas y los contratos temporales; dichos trabajadores deben pasar a ser trabajadores permanentes.
- Un verdadero combate a la corrupción e impunidad para lo cual debe integrarse una comisión conformada por representantes de las diferentes organizaciones sindicales, campesinas, populares. Etc.

• No a la criminalización de la protesta social; los gobiernos apegándose al estado de derecho buscaran reprimir toda forma de lucha y de expresión del descontento social.

Desde el PSOCA celebramos el trabajo de unidad y la movilización de los trabajadores el cual debe continuar a la vez misma consideramos que es el momento para que las organizaciones sindicales llamen a la huelga nacional de 24 horas como medida de presión para frenar los planes de austeridad ejecutados por el gobierno.

¡Viva la Unidad de Acción Sindical!

¡No a los planes de austeridad en contra de los trabajadores!

¡No al pago de la deuda!

¡Es hora de la Huelga Nacional!

¡Reunificación Socialista de Centroamérica o muerte!!

Centroamérica, 30 de marzo del 2017
Secretariado Ejecutivo

Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) ■



ATramec Y EL PROCESO DE LOS CDE

Por Alberto Castro

El ministerio de educación, MINED a inicios de abril volvió a ser un foco de tensión, en esta ocasión la lucha que es representada por ATramec se sitúa alrededor de una serie de demandas a partir de los incumplimientos laborales de las autoridades de educación hacia los compañeros que laboran bajo la modalidad de Consejos Directivos Escolares (CDE), lo más agravante de la situación ha sido el atraso de salarios. La mayoría de los salarios de esa modalidad son inferiores al salario mínimo vigente, que van desde \$80, \$100, o \$150 dólares mensuales, lo más escalofriante de la situación es que muchos llevan laborando hasta 30 años.

A algunos CDE de los centros escolares no les han renovado contrato para este año, y a otros les han ofrecido medio tiempo, bajo el argumento que el presupuesto escolar no da para pagar el nuevo salario mínimo, esto sucede en la cartera social que se supone debería ser modelo de gestión para el Gobierno en turno, con lo que esta situación muestra el descuido de la gestión del FMLN, y expresa una crisis en el modelo educativo salvadoreño hecho acorde al neoliberalismo, la política de descentralización educativa que dio vida a los CDE permitió que estos organismos se transformaran en mecanismos de centralización política de los partidos gobernantes, para utilizarlos para el vacío de su militancia manipulándoles a su conveniencia, imponiendo directrices y relegando funciones dentro de un ámbito de intermediación laboral y tercerización ilegal del empleo, por tanto es importante que se le dé pronta respuesta a esta crisis.

El deterioro económico: la pauta de la crisis del MINED

El 2016 cerró con despidos, adeudo de salarios y aguinaldos hacia muchos trabajadores contratados por los CDE, las autoridades del MINED lejos de atender la situación fueron negligentes al no prever el incremento salarial de este año, el cual debió ser reflejado en el presupuesto para dicha cartera. Cinco mil



trabajadores no recibieron el sueldo por durante tres meses pese a que finales de enero, Educación realizó un depósito por cinco millones de dólares para los centros educativos, en concepto de fondos de funcionamiento, del presupuesto atrasados de 2016.

Los trabajadores demandan además del pago, el cumplimiento de una promesa de campaña que hizo en el 2014 el FMLN, de pasar a tres mil trabajadores a Ley de Salarios, ahora la esperanza de esa promesa esta disipada, toca luchar para lograr tal conquista. La deficiencia presupuestaria del MINED se traduce en reducción de bonos escolares, que da como resultados la incapacidad de pago de salarios de los trabajadores contratados por los CDE, lo que genera que para salir a flote las direcciones escolares recurran a la realización de diversas actividades para recolectar dinero.

La acción de los padres y alumnos

Un suceso que es necesario recordar es lo que ocurrió a principios de este mes en el centro escolar "Herbert de Sola", municipio de Jayaque, La Libertad. Cuando padres de familia y alumnos cerraron el centro escolar, exigiendo el traslado de la directora escolar, por

posibles malversaciones de fondos y actos arbitrarios. Esta protesta se adhiere al corolario de señalamientos hechos por ATramec sobre el arbitraje de algunos directores de centros escolares, ha habido un fallo en la descentralización de funciones, lo que comprueba que en efecto el desequilibrio de la política educativa marcada por una crisis suscribe el fallo en la interacción real de directores, maestros, padres de familia y alumnos en el centro educativo de

forma general. Por tanto, los trabajadores que están contratados por los CDE deben pasar a Ley de Salarios, y esto debe ser una lucha donde es necesario que se sumen los padres de familia y alumnos, integrantes de los CDE.

Con la violación a los derechos laborales y salariales hacia un sector de trabajadores del MINED se priva a la niñez y adolescencia salvadoreña del derecho a una buena educación. Las siguientes acciones deben ir encaminadas a paros escalonados en los centros con el apoyo de padres y alumnos quienes deben dar muestras de apoyo, esta lucha por lograr que pasen a planilla los trabajadores CDE amerita tácticamente conducirla hacia la Asamblea Legislativa, ello indica que es importante hacer perentorio una serie de actividades entre padres, alumnos, maestros y trabajadores. ■



¿VENEZUELA: UNA CRISIS SIN SALIDA?

Por Orson Mojica

La crisis económica y política en Venezuela ya lleva varios años, y al parecer no hay salida inmediata. Mientras tanto las consecuencias de la crisis la están pagando las masas trabajadoras.

Los giros de la OEA

El mandato del chileno José Miguel Insulza como secretario general de la OEA se produjo en el periodo de ascenso del chavismo. La diplomacia petrolera de Venezuela dio como resultado que el chavismo ejerciera una notable influencia dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, aunque seguía siendo un ministerio de colonias del imperialismo norteamericano, estas no obedecían al pie de la letra el mandato de Washington.

El cambio de personajes en la secretaría general de la OEA, con la elección casi unánime (con el voto de Venezuela!) del ex canciller uruguayo Luis Almagro, en Mayo del 2015, produjo un cambio sustancial dentro de la OEA, que fue en última instancia el reflejo del cambio de correlación de fuerzas en América Latina. Se iniciaba el declive de los gobiernos populistas de izquierda, y comenzaba la profunda crisis económica y social en Venezuela, el país que fue el soporte principal del proyecto de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA).

La primera ofensiva de la OEA contra el chavismo

Cuando fue canciller, Luis Almagro participó activamente en una comisión de UNASUR que buscaba el diálogo en Venezuela, pero una vez electo secretario general de la OEA cambió su rol, de amigo del chavismo a su más acérrimo crítico. Un año después de su elección, Almagro encabezó una enorme ofensiva política y diplomática contra el chavismo. Por eso, con justa razón, Nicolás Maduro le llamó "traidor".

La primera gran confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la OEA se produjo en torno a la propuesta de vigilar u observar las elecciones legislativa del 6 de diciembre del año 2015, algo que el gobierno de Maduro rechazó tajantemente.

El primer gran intento por incluir a los cancilleres de la OEA en una salida negociada a la crisis de Venezuela, ocurrió en septiembre del año 2015, cuando Colombia intentó involucrar a la OEA en la crisis fronteriza, bajo el pretexto de contribuir a detener el éxodo de venezolanos hacia Colombia, pero no lo logró. La frustración de la canciller colombiana quedó reflejada en sus declaraciones: "Hay que replantear un poco para qué está la OEA, porque si no es capaz ni siquiera de hacer un foro sobre un tema de violación de derechos humanos, uno se pregunta: ¿Esos foros multilaterales finalmente cómo es que logran tener decisiones que favorezcan a los países?" (El País, septiembre 2015)

La derecha se toma la Asamblea Nacional

Las elecciones del 6 de diciembre del 2015 significaron un triunfo para la oposición de derecha, la misma que había sufrido aparatosas derrotas electorales en la época de Chávez, cuando los precios del petróleo le permitían destinar recursos para fortalecer la base electoral del chavismo.

Este giro a la derecha de las masas, tiene su explicación en el deterioro de las condiciones de vida, y no es tanto un problema ideológico. Sin recursos económicos que repartir, el chavismo comenzó a sufrir una grave erosión social que lo tiene al borde de perder el poder.

Ante el triunfo electoral de la derecha, el gobierno de Maduro mantuvo una política dual. Por un lado, el boicot y el desconocimiento político a los resultados electorales que llevaron al triunfo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición derechista. Por el

otro, presionado por diversos países, intento algunas formas de dialogo, pero en el fondo fueron maniobras políticas destinadas a ganar tiempo.

La suspensión del revocatorio y de las elecciones regionales

A finales de octubre del 2016, el Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo el control del chavismo suspendió los tramites del referéndum revocatorio, bajo el pretexto de detectar algunas irregularidades relacionadas con las firmas. Este fue un balde de agua fría para la oposición que consideraba que el referendo revocatorio era una salida a la crisis política.

De igual manera, el CNE no convocó a las elecciones de gobernadores que debían realizarse en diciembre del 2016, posponiéndolas para junio del 2017, violentando un mandato de la Constitución.

La oposición de derecha en Venezuela no quiere, bajo ninguna circunstancia, derrocar al gobierno chavista por métodos revolucionarios. Todo lo contrario: ha esperado pacientemente el momento de canalizar el descontento social por la vía electoral. El chavismo le ha cerrado temporalmente las puertas a esta opción, esperando el momento oportuno para hacer concesiones.

La maldita dependencia del petróleo

El 95% de los ingresos de Venezuela dependen del petróleo y sus precios en el mercado internacional. La crisis económica de Venezuela, otrora un país con muchos recursos, tiene su origen en la caída de los precios del petróleo. Entre 2014 y 2015 los ingresos por la renta petrolera pasaron de 39.716 millones de dólares a 13.236 millones; mientras que en 2016 batieron un nuevo récord a la baja: 5.291 millones. Otro dato, si cabe más contundente: en los últimos dos años y medio, un período que va desde finales de 2014, todo 2015 y todo 2016, Venezuela ha pagado algo más de 60 mil millones de



dólares en compromisos internacionales (Telesur)

Sin recursos económicos, el chavismo ha perdido base social de manera acelerada. El modelo del socialismo del siglo XXI", basado en los petrodólares, ha demostrado su rotundo fracaso. La crisis política se ha agudizado por la severa crisis económica.

El fracaso de los diálogos

Desde que estalló la crisis económica y política, el chavismo ha maniobrado con diversas formas de diálogo. Una misión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) intentó vanamente mediar entre los bandos en lucha. Otra misión de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, también fracasó en todos los intentos de negociación. Incluso, un delegado de El Vaticano participó en uno de estos diálogos, pero tuvo que salirse por la negativa del gobierno de Maduro de cumplir con los compromisos mínimos.

La estrategia del chavismo es resistir al máximo, incluso amenazando con la guerra civil, para poder negociar en una mejor posición de fuerzas. Mientras tanto, Venezuela se hunde en la miseria y la barbarie. El gobierno de Maduro resiste apoyándose, ya no en el movimiento de masas, como en la época de Chávez, sino en el aparato del Ejército, el gran árbitro.

La segunda ofensiva de la OEA

La 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió del 13 al 15 de junio del 2016 en Santo Domingo, República Dominicana, con la presencia de los 27 cancilleres de la región, incluido John Kerry, pero no se tocó el tema de la crisis en Venezuela, a pesar que ya existía una convocatoria para el 23 de junio en Washington para discutir la crisis en Venezuela, y la posible aplicación de la Carta Democrática de la OEA.

Pero en la reunión en Santo Domingo, a parte de los contactos informales entre los cancilleres, la OEA no logró reunir una mayoría de votos suficientes para

intervenir en la crisis venezolana. Lo mismo ocurrió con la reunión de cancilleres el 23 de junio del 2016, convocada para discutir la crisis venezolana. En esa ocasión, Venezuela logró atraer 12 votos y de esta manera no hubo quorum necesario para decidir sobre el envío de una misión diplomática de la OEA a Caracas, mucho menos aprobar la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela.

La reunión del Consejo Permanente de la OEA

Pero a finales de marzo del 2017, Luis Almagro volvió a la carga contra el gobierno de Nicolás Maduro. Después de



un intenso cabildeo, Almagro logró reunir 14 votos de cancilleres para convocar a una reunión del Consejo Permanente de la OEA con el objetivo de discutir la crisis en Venezuela. Los cambios de gobierno en Brasil, Argentina y Perú, se hicieron sentir en la nueva correlación de fuerzas dentro de la OEA. Después de un forcejeo, al final 20 países propusieron una hoja de ruta "para restaurar la democracia en Venezuela".

No propusieron una resolución para derrocar al gobierno de Maduro, sino iniciar una transición. Todos los gobiernos del continente, incluido Estados Unidos, tienen un profundo temor al estallido de una guerra civil que puede desestabilizar la región. Las vacilaciones de la OEA tienen un mensaje claro: las presiones diplomáticas persiguen el objetivo central que el Ejército de Venezuela tome la decisión de solucionar la crisis, que sean las propias fuerzas armadas la que impongan una salida a la crisis política, sea suplantando a Maduro o por cualquier

otra vía.

¿Comienzan las concesiones?

Después de la última reunión de la OEA, hay un impasse que tiende nuevamente a abrir una etapa de negociación. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de oficio revisó las sentencias por medio de las cuales le había quitado los poderes legislativos a la Asamblea Nacional en manos de la oposición de derecha. Nicolás Maduro pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que programe las elecciones de gobernadores, que habían sido pospuestas. Pero no todas son concesiones, al mismo tiempo se anunciaba la inhabilitación política de Enrique Capriles, el excandidato presidencial de la MUD y actual gobernador del Estado Miranda.

Es hora de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

La crisis en Venezuela exige una salida inmediata. El chavismo en aras de retener el poder, tiene la estrategia de resistir al máximo, aun contra la voluntad de la mayoría de los venezolanos.

Utiliza su control sobre la parte de la población que todavía le apoya, para evitar un estallido social, como lo fue en su momento el Caracazo. Pero al resistirse a utilizar los mecanismos democráticos que el propio Chávez instauró y consagró en la Constitución, está renegando de su pasado democrático.

La salida a la crisis debe ser democrática, de manera que la mayoría del pueblo decida el futuro del gobierno de Maduro, y si se debe respetar la Constitución heredada por Chávez o redactar otra, que refleje más los intereses de los sectores populares. Lo anterior no significa apoyar a la MUD o ser comparsas de la ofensiva imperialista a través de la OEA, sino todo lo contrario: la izquierda venezolana debe reagrupar a las masas trabajadoras, desligarse de los brutales errores del gobierno de Maduro, y decidir democráticamente el futuro a seguir, defendiendo a capa y espada las conquistas de la revolución bolivariana.

9 DE ABRIL DE 1948:

EL ASESINATO DE JORGE ELIÉCER GAITÁN, EL BOGOTAZO Y SUS CONSECUENCIAS

Por Leonardo Ixim

El asesinato del líder popular colombiano Jorge Eliécer Gaitán Ayala el 9 de abril de 1948 marcó un hito en la historia de Colombia y la conflictividad entre las clases en una de las sociedades más desiguales del continente; no solo por sus consecuencias inmediatas, el Bogotazo, la violencia, el gobierno de Pinilla y el del Frente Nacional, sino de carácter más global. La guerra interna que vive ese país, el uso del terrorismo de estado por parte de los grupos dominantes y la reacción popular violenta, entre otras cosas, que hoy se prefigura en un nuevo intento de acuerdo de paz, sin que los mecanismos de terror de la oligarquía estén desactivados.

Gaitán Ayala nació el 23 de enero de 1903 en Bogotá, fue un importante líder del Partido Liberal Colombiano. Este partido se ha caracterizado en su historia, por además de ser un instrumento de las elites oligárquicas, tener bases plebeyas y alas que en varios momentos tuvieron posiciones progresistas.

Eliécer Gaitán, fue un líder popular de formación abogado y miembro de una de estas alas. Fue ministro de trabajo y previsión social en el gobierno de Alfonso López Pumarejo entre 1942 y 1943, ministro de educación en el gobierno de Eduardo Santos entre 1940 y 1941, alcalde de Bogotá años antes y miembro de la Cámara de Representantes y presidente de esta entre 1931 y 1932.

Contexto social

Se dieron grandes huelgas de trabajadores bananeros en 1929 y 1932 contra la United Fruit Company, propietaria de extensas plantaciones de banano en la región de la costa caribeña colombiano; la primera por una masacre de obreros aplastada por el ejército de ese país a pedido de la patronal gringa,



huelga que tuvo el apoyo además de los trabajadores del ferrocarril y los puertos, de los pequeños propietarios bananeros, con el protagonismo de militantes del Partido Liberal y del minúsculo Partido Socialista Revolucionarios que años después se convertiría en el Partido Comunista Colombiano (PCC). Después de ello llegaron al gobierno, luego de una larga permanencia del Partido Conservador, una serie gobiernos liberales: los dos gobiernos de López Pulmarejo, el de Santos y el de Lleras Camargo.

Estos aprobaron una reforma constitucional en 1936 que entre otras

medidas decretó la función social de la propiedad, la protección de derechos laborales y sindicales y la intervención del Estado en la economía. Fue una forma de responder a las demandas sociales sin romper la dependencia total del imperialismo, pero ya para la segunda mitad de la década de los 40s el liberalismo había perdido el gobierno por el conservador Mariano Ospina Pérez, debido a las divisiones del Partido Liberal entre el ala plebeya de Eliécer Gaitán y el ala oligárquica de Gabriel Turbay.

La dependencia al imperialismo gringo por su parte, se caracterizaba por haberle pagado a Estados Unidos la suma de 25 millones de dólares tras aceptar la independencia de Panamá en 1903 y la concesión para la construcción del canal, la concesión de tierras a la UFCO y a empresas petroleras.

Las inversiones estadounidenses para 1928 eran de 235 millones de dólares.

En ese contexto, en toda América Latina existían luchas populares democráticas anti-oligárquicas y anti-fascistas, que habían derrocado gobiernos dictatoriales en varios países de Centroamérica y el ascenso de gobiernos populistas como los de Perón, Cárdenas y Vargas, en Argentina, México y Brasil, respectivamente. Así en Colombia, existía un malestar contra el gobierno conservador que había revertido algunas medidas del ciclo progresista del liberalismo.

El Bogotazo

En ese ambiente emerge como líder del malestar popular, la facción más organizada de la oposición, la de Gaitán Ayala, que venía de ganar las elecciones legislativas en 1947 y tras la muerte del Turbay en París, quedó la vía libre a Gaitán en su control del liberalismo. Se celebra en ese marco, la IX Conferencia Panamericana en Bogotá, después de casi cincuenta años de parte de Estados Unidos para crear un organismo interamericano; se logra establecer en 1948 lo que se denominó la Organización de Estados Americanos (OEA).

La presencia de los delegados americanos, coincidió con la presencia de un congreso estudiantil donde figuraba entre otros líderes Fidel Castro, que sirvió de fondo para denunciar el intervencionismo gringo en Latinoamérica.

Esto en un contexto que prefiguraba ya las estructuras de la guerra fría y toda la estrategia de seguridad nacional. Recordemos que años antes en 1943 se había conformado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), en Rio de Janeiro. En ese sentido se forma la OEA que fue calificada por el Che Guevara como el departamento de colonias tras la expulsión de Cuba años posteriores.

Aprovechando esta ocasión, la población de la capital colombiana salió a las calles para exigir la renuncia del gobierno conservador. En estas movilizaciones se puso a la cabeza Eliécer Gaitán, identificado por el gobierno como líder, procediendo a mandar un grupo de esbirros a asesinarlo, identificados con el Partido Conservador. Años después ha salido la tesis de que éste fue asesinado por miembros de la recién creada CIA.

La revuelta parecía salirse de las manos del gobierno de Ospina Pérez, pues a las manifestaciones que adquirieron mayor relevancia tras la indignación por el asesinato de Gaitán, la muchedumbre cogió al presumible asesino y lo colgó en una plaza. En ese ambiente policías y soldados se unieron a las movilizaciones, entregando y usando sus armas contra las fuerzas represivas.

La respuesta gubernamental fue fortalecer las unidades represivas leales al gobierno para aplastar la movilización

popular, dejando como saldo según versiones oficiales 500 muertos, pero según otras versiones hasta tres mil.

Consecuencias

En diciembre de 1949 se realizan elecciones generales, en las cuales los liberales no participan aduciendo falta de garantías, siendo nombrado prácticamente como presidente Laureano Gómez, quien fuera ministro de relaciones exteriores del gobierno de Ospina. Este gobierno continuó los rasgos represivos del de Ospina quien había cerrado el Congreso. Gómez aplicó un estado de sitio permanente, se reprimió a la oposición liberal radical y a las izquierdas, buscando imponer un régimen político corporativo al estilo del falangismo español.

Este gobierno protagonizó lo que se denominó “la violencia” cual fue una política represiva de asesinatos a líderes campesinos por medio de paramilitares denominados “pájaros”, ocasionando miles de asesinatos y el desplazamiento de población que sería el sello de los conflictos en ese país y el martirio para el campesinado colombiano; a lo cual se agrega los 220 mil muertos que toda la guerra interna a generado en ese país y el mas de un millón de desplazados, globalmente.

El campesinado por su parte respondió con grupos de autodefensa organizados por el Partido Comunista y las facciones radicales del liberalismo. Esta situación se volvió intolerable y un sector militar dio un golpe de estado en 1953 asumiendo el teniente coronel Pinilla Rojas, formando un partido la Alianza Nacional Popular (Anapo), estableciendo un gobierno populista que derivó autoritariamente y tuvo que renunciar en 1958, ante protestas estudiantiles y populares.

Los sectores dominantes, a la caída de Pinilla para lograr cierta estabilidad crearon el Frente Nacional entre los partidos liberales y conservadores, que gobernó hasta finales de los setenta donde se repartieron el gobierno, dos periodos cada uno y las distintas instituciones del Estado, aplicando una estrategia contrainsurgente, que con el pretexto de los denominados “bandoleros” se persiguió al pueblo organizado. Por su parte, el campesinado, pese a aceptar

la tregua durante el gobierno de Pinilla, aunque éste hostigó al Partido Comunista, siguió siendo reprimido por bandas paramilitares que agarraron fuerza durante el Frente Nacional y de esto evolucionó a las denominadas “repúblicas independientes” y de ahí, a la formación de los primeros grupos guerrilleros.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1964 con la venia de los comunistas, el Ejército de Liberación Nacional formado por elementos intelectuales de capas medias inspirados en la revolución cubana en 1965 y el Ejército Popular de Liberación en 1967, una escisión maoísta del PCC, que conformo el Partido Comunista Marxista Leninista, que continúa movilizado. En la década de los setenta un sector de capa media rompe con la ANAPO y forma el M-19 y autodefensas indígenas formaron el Movimiento Armado Quintín Lame.

En la década de los 80s se efectuaron las primeras pláticas de paz entre las guerrillas, en ese momento aglutinadas todas en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, aunque el ELN se separó. Estas pláticas se dieron en el gobierno del conservador Belisario Betancur y liberando a varios presos políticos, lo que permitió de parte del PCC y las Farc-EP que en 1982 se agrega Ejército del Pueblo, organizar la Unidad Popular. Agrupación que fue desarticulada por el paramilitarismo, fracasando las negociaciones.

A inicios de los 90s el M-19, Quintín Lame y parte del EPL se desmovilizan en el gobierno del liberal Virgilio Barco. Posteriormente en el gobierno del conservador Andrés Pastrana a finales del siglo pasado se vuelve a intentar negociaciones entre el Estado y las Farc-EP. En la actualidad el proceso de paz con este grupo guerrillero parece encaminado, aceptando estos la desmovilización, sin embargo, con el ELN habido diferencias para iniciar las negociaciones; el EPL por su parte al ser considerado una banda criminal y sin mayor fuerza, no está en el escenario una negociación. Todo esto, mientras que el terrorismo de Estado continúa por medio del paramilitarismo contra el movimiento popular y el tema de la justicia transicional parece difuso.





LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES: ¿HACIA DONDE VA COSTA RICA? II PARTE

Por José René Tamariz

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su estudio intitulado “El enfoque de brechas estructurales. Análisis del caso de Costa Rica” identifica seis brechas estructurales en el país, a saber: la brecha de pobreza y desigualdad; la brecha de educación; la brecha de género; la brecha de productividad e innovación; la brecha de infraestructura y la brecha fiscal. En este artículo no abordamos todos esos

problemas estructurales del capitalismo costarricense, llamados por la CEPAL “brechas estructurales”. En realidad, desde nuestro punto de vista, algunos problemas que fueron en algún momento coyunturales se han convertido en problemas

o desajustes estructurales del sistema económico capitalista costarricense, tales son los casos de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el déficit fiscal. Estos problemas, no tienen solución inmediata o de mediano plazo sino no es mediante cambios importantes en la acumulación de capital o bien mediante la derrota histórica del movimiento de masas, imponiéndoles planes de ajustes que hagan recaer sobre sus condiciones de vida la solución, por ejemplo, del déficit fiscal y profundizando, aún más, la explotación de la mano de obra, mediante, la baja de los salarios y la flexibilización laboral.

La CEPAL en sus conclusiones sobre

la “brecha de la pobreza y desigualdad” sostiene que “El estancamiento de la pobreza y el aumento de la desigualdad económica están provocando la fragmentación de la sociedad costarricense, una de cuyas manifestaciones es la pérdida de la educación como agente de movilización social...”. (CEPAL, 2016: 92). Efectivamente, mientras la pobreza se estanca de forma permanente en más del 20%, el desempleo aumenta pasando del 4,6% en el año 2007 al 9,7% en el año 2017, es decir, un incremento del 106% y

riqueza del país, medido por el producto interno bruto (PIB). Lo que un puñado de super ricos se apropia del capital, una gran mayoría pierde de diferentes formas. Aquí se encuentra el nudo gordiano de los problemas estructurales en Costa Rica.

La super riqueza de poquísimos super ricos es la pobreza y miseria de miles de trabajadores y de grandes sectores populares en Costa Rica. El “modelo económico” del capitalismo surgido en los inicios de los años 80 ha conducido a la profundización de esta problemática,

a pesar, de que muchos neoliberales pretendan ocultar. Analicemos en donde se encuentran las causas y razones por las cuales ese “modelo económico” ha conducido a semejante situación. En Costa Rica, existe actualmente una dualidad



la desigualdad también se incrementa, una ínfima minoría de super ricos suben de forma galopante sus capitales. Respecto a ese enriquecimiento, la CEPAL señala que “... se han realizado estudios en los que se ha señalado que Costa Rica pasó de tener 85 personas que concentran un capital de más de 30 millones de dólares en 2012 a 100 en 2015. En conjunto, esas personas acumulan una riqueza que representa un tercio del PIB. El determinante limitante del mercado laboral precario en la pobreza extrema también es limitante en la dimensión de la desigualdad del ingreso...”. (Ídem). Es decir, que 100 multimillonarios controlan el 33,3% de la

económica: la economía se encuentra partida en dos sectores, denominados por los técnicos del Programa Estado de la Nación como la “vieja” y “nueva” economía.

Según Velia Govaere Vicarioli, catedrática de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), “En los últimos 30 años, la política pública se ha concentrado más en atraer IED que en transformar el aparato productivo nacional. El alto desempeño de las exportaciones costarricenses, generadas sobre todo por la IED, no tienen relación con la productividad media de las empresas nacionales. La industria nacional no ha



cambiado significativamente ni pautas de comercio ni de producción. Las empresas nacionales participan minoritariamente en el crecimiento sostenido de las exportaciones y han tenido poca evolución en innovación, diversificación, sofisticación, productividad y competitividad internacional". (La Nación, 23 de junio del 2015).

Por otro lado, según la CEPAL "... Cerca de un 97% del parque empresarial costarricense está conformado por pymes, de los cuales la región Central concentraba en 2015 la mayor cantidad (un 74% del total de pymes del país), mientras que ninguna de las otras regiones concentraba más del 7%...". (Ídem). En realidad, la economía de Costa Rica está conformada por una red mayoritaria de pequeñas y medianas empresas que, si bien, genera la mayor parte del empleo nacional, tienen poca participación en los sectores más dinámicos de la economía y mantienen un rezago muy grande e importante en los niveles de productividad y otros determinantes económicos. Solamente "... El 2% de las

empresas contribuye a más del 70% de las exportaciones y el 73% exporta menos del 1%". (La Nación, 3 de enero del 2014). Por otro lado, el sector más concentrador de la producción nacional para las exportaciones, en manos de empresas transnacionales, contribuyen muy poco en generar empleo, apenas el 2,7% de la población económicamente activa (PEA), así como contribuye muy poco con los ingresos fiscales, dado que mantienen inmensas exoneraciones fiscales y otros privilegios de los cuales no goza la decrepita industria nacional. Estas graves disparidades, desigualdades y asimetrías entre los dos sectores de la economía, condujo inevitablemente a las grandes desigualdades sociales y económicas y fragmentación en la sociedad costarricense.

Producto de ese proceso continuo de desigualdad y concentración de la riqueza en los últimos 30 años de funcionamiento del modelo de promoción

de las exportaciones y apertura comercial (PEAC), las masas intentaron, por la vía electoral, mejorar y cambiar su decadente situación socio-económica, votando por el Partido Acción Ciudadana (PAC) que vendía la propuesta de un cambio en caso de acceder a la presidencia y al control del aparato del Estado. Sin embargo, después de tres años de gobierno del PAC, se ha demostrado la incapacidad de los sectores pequeñoburgueses educados de poder introducir o hacer cambios importantes,



tanto a nivel de la estructura económica como de la superestructura política, ya sea institucional como estatal. Al final, los gobernantes del PAC han reducido su gestión gubernamental a administrar la crisis del aparato del Estado, así como terminar algunas obras iniciadas, como el puente de la platina, por los gobiernos anteriores. A pesar de que el gobierno de Solís ha mejorado, en los últimos días, su imagen, eso no modifica de forma sustancial la intrascendencia de su gestión en el control del aparato del Estado. En realidad, el gobierno no tiene ninguna obra social y económica de importancia y de impacto en la sociedad costarricense que contenga la marca PAC. De último, es de gran importancia señalar que las burocracias sindicales, ya sea de los diferentes bloques sindicales, así como de sindicatos contribuyeron a que el gobierno del PAC haya sido el gobierno que menos protesta social, huelgas y movilizaciones, tenga en su periodo de

gestión gubernamental. Esta es la única marca PAC, pero debido al apoyo de las burocracias sindicales, las cuales han creído en el supuesto "progresismo" de ese gobierno.

A falta de una verdadera opción de izquierda, las amplias masas que habían girado, electoralmente, hacia una opción de centro con el PAC, nuevamente tienden a girar hacia la derecha con la posibilidad real de llevar al poder al partido liberación nacional (PLN). La reciente convención nacional realizada por el PLN con su gran derroche de millones de colones y despliegue propagandístico que le dieron los medios de comunicación del capital, refleja las intenciones de un gran sector del capital nacional y transnacional para que este partido regrese a ser gobierno y se haga con el control del aparato del Estado. En especial, amplios sectores burgueses (Luis Liberman,

Francis Durman, Marco Vinicio Ruiz y otros) invirtieron varios millones de colones en la campaña de Antonio Álvarez Desanti.

Por otra parte, el PAC no tiene probabilidad de ganar unas nuevas elecciones porque no han cumplido con sus promesas del cambio. El Frente Amplio (FA), en su labor legislativa y práctica, ha aparecido muy ligado a las políticas del gobierno del PAC, cargando como lo ha dicho muy bien su presidenta, Patricia Mora, con las "pulgas" del gobierno. Consideramos, más bien que en perspectiva el FA tiende a disminuir su caudal electoral y, por ende, a perder varias diputaciones. El PUSC es posible que mejore sus condiciones y pueda tener una mejor votación. Todo lo anterior, obviamente, es una previsión sujeta a que no haya condiciones y situaciones espectaculares que modifiquen las actuales condiciones. ■



Viene de la pagina No 20

burguesía quebraron en el periodo 1990-2006, otros estaban exhaustos, pero un reducido grupo logró desarrollarse y mezclarse con sectores tradicionales, como el grupo AGRICORP ligado a Bayardo Arce. Dentro de la burguesía sandinista se produjo un proceso de concentración de capital, en manos de altos mandos del EN y la PN.

Por su parte, los sectores tradicionales, confiscados o no, que regresaron o se mantuvieron en Nicaragua, después de la apertura de 1990 se concentraron en desarrollar un capital financiero. Nicaragua es el único país donde, mientras la población se empobrece, surgen nuevos y poderosos grupos financieros como LAFISE, BANPRO y BAC, que tienen ramificaciones regionales. Ahora la oligarquía en Nicaragua no es terrateniente sino financiera. Los grupos financieros nicaragüenses tienen las más altas tasas de ganancias de toda la región centroamericana.

Detrás del endurecimiento del régimen bonapartista de Ortega se oculta el proceso de enriquecimiento de la familia Ortega, y sus allegados (altos mandos del EN y la PN). La concentración del poder es la otra cara del proceso intenso de acumulación y concentración de capitales, cuya base económica es la generación y distribución de energía eléctrica y la comercialización de los hidrocarburos. Esto fue posible por la instauración de un monopolio en materia energética, a partir del control absoluto de la cooperación petrolera venezolana.

La privatización parcial del sector energético se produjo en el periodo 1990-2006, dejó un enorme vacío. Actualmente el sector energético es uno de los sectores más dinámicos de la economía. Nicaragua es el país que vende el combustible más caro y tiene la más alta tarifa de energía en Centroamérica. Las ganancias son fabulosas. DISNORTE y DISSUR fueron comprados por el consorcio español TSK-MELFOSUR, ligado a la nueva burguesía sandinista.

Otra de las características de este proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capital, es que está basado en el comercio. Este sector de la burguesía sandinista se ha convertido en el gran intermediario de la venta de carne, frijoles, café, etc., explotando con una política de precios a la masa de pequeños y medianos productores agropecuarios, y también se ha convertido en el principal

abastecedor de la red de pequeños y medianos comerciantes, formales o informales, lo que se puede lograr precisamente a partir del control absoluto de las instituciones del Estado.

3.- La crisis del modelo y la crisis del régimen bonapartista

Pero este modelo de acumulación originaria y extraordinaria de capital está entrando en crisis, con el desplome de la cooperación venezolana. Actualmente Nicaragua compra el petróleo a Estados Unidos y debe pagarlo de manera inmediata, lo que se traduce en una disminución lenta pero paulatina de las divisas. Está pendiente el candente tema de quién pagará esta deuda, que es estatal pero que en los hechos ha sido utilizada de manera privada por la familia Ortega-Murillo.

La desaparición de gobiernos populistas de izquierda en Argentina y Brasil, el débil triunfo del correísmo en Ecuador, y la aguda crisis de Venezuela, es un contexto internacional que incide en la evolución del régimen bonapartista de Nicaragua.

Este modelo había funcionado, en parte, no solo por los beneficios de la anterior ayuda petrolera venezolana, sino también porque hasta el momento no se han producido roces con los sectores tradicionales de la burguesía, porque hasta el momento la burguesía sandinista ha respetado las fronteras entre los distintos grupos económicos, pero en la medida que la crisis se agudice la crisis económica, como ya está ocurriendo, las tentaciones de fagocitar a los sectores más débiles será una realidad cada vez más cercana, como ocurrió durante la crisis del somocismo.

4.- La nueva NICA ACT: énfasis en la lucha contra la corrupción.

Aunque el gobierno de Daniel Ortega mantiene el control absoluto de la situación en Nicaragua, ya existen síntomas de resquebrajamiento del régimen político, pero sobre todo un creciente deterioro de la relación del FSLN con el movimiento de masas. Las concesiones políticas de Ortega al permitir la observación electoral de la OEA en las próximas elecciones municipales, y autorizar la creación de nuevos partidos políticos, no calma las inquietudes de los legisladores norteamericanos.

Recientemente, 25 congresistas republicanos y demócratas introdujeron una nueva versión de la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), pero esta vez

haciendo énfasis en condicionar cualquier préstamo al gobierno de Nicaragua, a la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la corrupción, lo que sería supervisado por el gobierno de Estados Unidos.

Al anunciar la nueva versión del proyecto de ley, la ultra derechista congresista republicana, Ileana Ros-Lehtinen, declaró que “debemos continuar con el sostenimiento de estándares para todos los gobiernos de Centroamérica en temas de derechos humanos, corrupción y transparencia mientras examinamos dónde usar el dinero de contribuyentes estadounidense (...) Esta versión de la Ley Nica va un paso más allá de la que Albio y yo presentamos en el último Congreso, pide que el régimen de Ortega combata activamente la corrupción y tome las medidas significativas para proteger a defensores y activistas de los derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas”. (CNN, 07/04/2017)

El nuevo elemento introducido es la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, algo que en el fondo atenta o cuestiona directamente el actual proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capital. Todo indica que hay un consenso bipartidista de extender el modelo de lucha contra la corrupción en toda Centroamérica. Estados Unidos impulsó, en una primera fase, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El imperialismo norteamericano presiona y forcejea por la creación de una CICIES en El Salvador, y ahora impulsa la NICA ACT II contra el gobierno de Nicaragua.

La lucha contra la corrupción y contra el lavado de dinero se ha convertido en la punta de lanza del imperialismo norteamericano contra sectores burgueses emergentes, que no son le son incondicionales. Es obvio que estos sectores burgueses emergentes utilizan el poder político y el control del aparato del Estado para acumular capital, causando desorden e inestabilidad en relación a los grupos tradicionales.

5.- El debate en torno al nuevo proyecto de NICA ACT II

Si por la víspera se saca el día, todo indica que la administración Trump mantendrá, igual que en la época de Ronald Reagan (1981-1989), una doble política de presiones y negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega. Estados Unidos ha reconocido



públicamente el empeño y colaboración de Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que mantiene una sana política macro económica, que ha logrado crear un ambiente de seguridad, pero eso no es suficiente, ahora comienza a hacer énfasis en la lucha contra la corrupción.

Aunque el proyecto de NICA ACT II no ha sido aprobado, ya está surtiendo efectos. Luis Almagro, secretario general de la OEA, declaró recientemente que “el citado proyecto de ley, en el contexto de la presente legislatura, no constituye un aporte constructivo a los trabajos que el gobierno de Nicaragua y esta Secretaría General vienen realizando en materia de cooperación para el fortalecimiento democrático, electoral e institucional en el país, que tienen como referencia directa los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana”. (El Nuevo Diario, 05/04/2017)

Luis Almagro no es antiimperialista, es todo lo contrario, un empleado de Estados Unidos, sus críticas obedecen a que representa el ala negociadora a nivel diplomático.

Las presiones iniciadas por el Congreso de Estados Unidos están destinadas a obtener más concesiones de parte de Ortega, a acelerar el proceso de reformas políticas a lo interno de Nicaragua. En este contexto, la OEA aparece como una mediadora, a diferencia de la agresividad que mantiene contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

La hipótesis de que el bloqueo de préstamos incida negativamente en la economía nicaragüense, aterra a la cúpula empresarial. José Adán Aguerrí, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), expresó su preocupación al declarar que “cualquier disposición que perjudique al país no debe ser aceptada, hay que seguir buscando el fortalecimiento de la institucionalidad por la vía del diálogo y el entendimiento, que no vaya en la dirección contraria a lo que ya se ha estado haciendo con la OEA”, (La Prensa, 06/04/2017)

Álvaro Rodríguez Zapata, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), hizo un llamado a la “imperativa necesidad de la adopción de medidas para evitar la aprobación (...) Respaldamos firmemente el proceso de diálogo promovido por la Organización de Estados Americanos y la necesidad impostergable de fortalecer la institucionalidad (...) Hacemos un llamado a las autoridades nacionales a acelerar el proceso de diálogo y sobre todo buscar

las reformas necesarias con el fin de restar argumentos al congreso de Estados Unidos para la aprobación de esta Ley” (La Prensa, 07/04/2017)

Las cúpulas empresariales siempre son proclives a las negociaciones, donde ellos pueden incidir y garantizar la buena marcha de sus negocios. Las dos principales cámaras empresariales no defienden al gobierno de Ortega, sino que, como buenos oportunistas, piden más concesiones a través de un Diálogo Nacional y el fortalecimiento de la institucionalidad, que el fondo significa dismantlar gradualmente el régimen bonapartista.

En relación a la NICA ACT II, Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, declaró que “Realmente es lamentable que un país que se dice hermano pueda verdaderamente crear determinadas leyes que no afectan al gobernante, sino que afectan a la población. Se pretende que afectando al gobernante se afecte a la población, pero yo creo que la sensibilidad está en nuestra gente sencilla, en aquellos que no pueden gozar de los proyectos, no pueden gozar de los salarios, así que ojalá que esto sea solamente un proyecto, ojalá que no se llegue a aprobar”. (El 19 Digital, 07/04/2017)

Pero la posición de Brenes no es todavía la posición de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Nicaragua, la cual ha sido muy crítica al régimen bonapartista de Daniel Ortega.

Todos los partidos políticos con representación parlamentaria, incluidos liberales y conservadores, expresaron su condena, mediante una declaración oficial de la Asamblea Nacional.

6.- La derecha quiere recoger los frutos de la NICA ACT II

Como era de esperarse, como carroñeros, los partidos de derecha, apoyan veladamente el proyecto de NICA ACT II, y tratan de sacar el mayor provecho posible, a pesar que ellos han sido derrotados en la lucha política contra el bonapartismo de Ortega.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD), constituido por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y grupos aliados de la sociedad civil, en un comunicado expresó que “Lamentamos que una vez más en nuestra historia, el empeño de grupos políticos aferrados al ejercicio dictatorial y corrupto del poder, en este caso, la Dictadura Ortega Murillo y sus aliados, haya creado las condiciones para que se restrinja la

cooperación financiera internacional”. (Terra 06/04/2017)

Kitti Monterrey, presidente del nuevo Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), en una entrevista se pronunció sobre la NICA ACT II: “La “Nica Act” ayuda a presionar a este Gobierno. Y los Estados Unidos están en lo correcto en usarla como un mecanismo de presión”. (La Prensa 12/03/2017)

La algarabía no tiene límites. Lo que no han podido hacer en las calles, lo hacen los congresistas imperialistas. A partir de la introducción del nuevo proyecto de NICA ACT II han aumentado las peticiones de los partidos de la derecha. En un reciente editorial de La Prensa, se sintetizan las nuevas demandas: “(...) Ortega tiene que modificar el Memorándum de Entendimiento con la OEA e incluir en este un cronograma de reformas constitucionales e institucionales, para permitir que Nicaragua regrese a la senda de la democracia, comenzando por la celebración de elecciones libres, limpias y vigiladas por observadores independientes, nacionales y extranjeros”. (La Prensa, 07/04/2017)

Los partidos de derecha no se conforman con la prometida auto reforma del régimen político, sino que quieren repetir los Acuerdos de Esquipulas II bajo una nueva versión.

7. Rechazo a la injerencia imperialista y lucha por los derechos democráticos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechazamos la NICA ACT II y cualquier proyecto de ley que se vaya a discutir en el Congreso de los Estados Unidos, que signifique una injerencia en los problemas y asuntos internos que los trabajadores nicaragüenses debemos resolver.

El régimen bonapartista de Daniel Ortega no ha restringido los derechos democráticos a los empresarios, sino que solamente ha reprimido a los trabajadores que hacen huelgas y a los campesinos que se movilizan contra el proyecto de construcción del canal interoceánico. Las masas trabajadoras y populares son las que han resentido en carne propia la restricción de los derechos democráticos. Debemos luchar por que estos sean respetados, incluidos el derecho a organizar nuevos partidos y la realización de elecciones justas, libres y democráticas, sin injerencias del imperialismo. La lucha por las libertades democráticas debe ser combinada con la lucha para obtener mejores salarios y un nivel de vida digno. ■

SOLO LA MOVILIZACIÓN NACIONAL DERRUMBARÁ PROYECTO REELECCIONISTA DE JOH

Por Sebastián Ernesto González

Los resultados de las elecciones internas del 12 de marzo del presente año, solo siguen ratificando la manipulación y los escandalosos fraudes que se dan en cada elección de autoridades. En esta ocasión con un nuevo ingrediente; la oficialización de la candidatura de Juan Orlando Hernández para la reelección. Motivo por el que en el 2009, le dieron Golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales. Aunque en los hechos, en aquella ocasión solo fue la convocatoria para responder si se instalaba una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre de dicho año.

Sin duda alguna, en esta ocasión JOH cuenta con el benplácito de la burguesía hondureña, el imperialismo yanqui y la comunidad europea. De ahí que su candidatura avance sobre ruedas y cuesta abajo hacia cuatro años más al frente de la dirección del país, sin importar si él y su Partido Nacional saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad Social y otras instituciones del Estado o bien, si los principales dirigentes y funcionarios de la administración de Porfirio Lobo y el mismo JOH están involucrados en el narcotráfico, a vista y paciencia de los mismos norteamericanos.

Está muy claro, que mientras JOH sirva al proyecto gringo estos le mantendrán al frente, sin importar lo fraudulento de las elecciones y las maniobras que se hagan para mantener apagada a la oposición. De hecho, es el único que les garantiza la implementación de las políticas del FMI y de las políticas injerencistas tal y como sucedió esta semana, el lunes 3 de abril, en que el representante de Honduras ante

la OEA, Leonidas Rosa Bautista cumplió al pie de la letra las órdenes del tío Sam.

“El Consejo Permanente de la OEA, estaba previsto para reunirse de forma extraordinaria el lunes en su sede de Washington para abordar la ruptura del orden constitucional en Venezuela y analizar posibles medidas, pero Bolivia, que ostenta la Presidencia temporal desde el pasado sábado, la suspendió apenas unas horas antes. A pesar de la suspensión, un grupo de 20 países ha solicitado seguir adelante con la cita regional, que finalmente se ha celebrado presidida por el representante permanente de Honduras, Leonidas Rosa Bautista, al miembro más

para ejercer el sufragio en el territorio nacional. Mientras el total de votantes de los partidos políticos que se presentaron a elecciones internas fue de 1378770 (PN), 700861 (PL) y 461825 (LIBRE), siendo la cantidad total de 2541456 personas que se presentaron a los centros de votación, cantidad que corresponde apenas al 43.85% del Padrón Electoral.

2) El total de votos blancos y nulos en los tres partidos políticos fue de 358966, cantidad que corresponde al 6% del padrón electoral. Entonces el porcentaje de votos válidos fue de 37.85% del total de personas habilitadas para votar.

3) La votación total lograda entre Luis Zelaya y Gabriela Núñez del PL, representa el 21% del total que se presentó a las urnas. Mientras los votos logrados solo por Xiomara castro del Partido Libre significan el 15% del total presentado a las urnas y JOH logró el 41% del total votante. Según estos datos ni Luis Zelaya, Gabriela Núñez y Xiomara Castro unidos le ganarían a JOH.

El análisis por partido es similar, si nos vamos al total de votos por partido tenemos que el PL obtuvo el 27.58% de la votación total y Libre el 18%, mientras

que en el PN el porcentaje logrado con respecto al total fue del 54%.

4) En este proceso ha faltado el porcentaje muy significativo que arrastra Salvador Nasralla, a través del Partido Anticorrupción, quien no fue a elecciones internas el 12 de marzo.

Estos puntos de reflexión corresponden a los datos otorgados por el TSE, ahora bien, siendo objetivos y analíticos podemos afirmar que el único partido que invirtió mucho dinero



antiguo, ya que no estaban ni el presidente, el boliviano Diego Pary Rodríguez, ni el vicepresidente, el haitiano Jean-Victor Harvel”. elEconomistaAmérica.com

Resultados de elecciones: ¿Un falso espejismo?

Analícemos algunos datos:

1) Según el Padrón Electoral otorgado por el Tribunal Supremo Electoral, este contiene una cantidad de 5,795,264 ciudadanos habilitados



para movilizar a los votantes fue el PN, utilizaron mucho dinero y también la coacción, so pena de no beneficiar con los programas sociales otorgados, o no dar trabajo en el futuro si no aparecían en el censo. El trabajo hecho por el PN reflejó mucha logística y derroche enorme de recursos.

Por el contrario, la oposición estando en la llanura no pudo presentar la misma cara, principalmente el Partido Libre que ha sido duramente golpeado por las traiciones y por la carestía de recursos. En el Partido Libre la propaganda previa a las elecciones fue muy raquítica, y no hubo despliegue de caravanas para transportar a los electores. Los votantes que asistieron a las urnas fue porque aún mantienen la esperanza de una salida, al margen de los comportamientos de los dirigentes.

La impopularidad de JOH no asegura su reelección

Hasta ahora, el repudio hacia JOH es enorme, las medidas económicas impuestas han llevado a miles de familias por debajo de la línea de pobreza. El endeudamiento de la clase asalariada es enorme, mientras a nivel macro económico la empresa privada abunda en dinero y los grandes beneficiados son los banqueros.

El saqueo al IHSS movilizó a la población en el 2015 en contra de los saqueadores, pero muy hábilmente el régimen doblegó a los principales dirigentes opositores y estos, de forma cómplice terminaron desmovilizando. Nunca existió el deseo de movilizar porque en el fondo prevalece el carácter pequeño burgués de los mismos. Al final, nuevamente el imperio con doble moral, dieron origen a la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras). Hecho que le dio el tiro de gracia a las marchas de las antorchas. A más de un año de su funcionamiento, la MACCIH poco o nada

han hecho en contra de la corrupción del régimen post golpe.

Tampoco ha doblegado a Juan Orlando el testimonio del líder del desarticulado grupo narcotraficante “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, personaje que es juzgado en una corte de New York y que ha declarado que Porfirio Lobo y otros grandes personajes políticos del país facilitaban el paso de la droga hacia el norte al igual que participaban del lavado del dinero derivado del mismo, uno de los mencionados es el hermano de JOH, Juan Antonio Hernández. Pero obviamente, JOH sigue siendo el personaje para aplicar

sostén del régimen. Para Manuel Zelaya y Salvador Nasralla la salida siguen siendo las votaciones generales de noviembre a pesar de los gigantescos fraudes que ya para nadie son desconocidos.

Pero el porcentaje de oposición al régimen es alto, es del 76.6% del padrón electoral, por lo tanto el régimen y sus secuaces deben seguir bregando entre ese caudal electoral de varias formas para dividir la votación opositora, y mientras los líderes no entiendan que hay que movilizar, el trabajo se le hace más fácil a Juan Orlando.

Dividir a los partidos LIBRE y PAC para revivir el bipartidismo

Como el régimen no se duerme en sus laureles, también ataca a los nóveles partidos introduciéndoles caballos de Troya para que dividan al votante o lo desanimen a votar. Ya pasó con Libre y ahora le toca el turno al Partido Anticorrupción.

El TSE (Tribunal Supremo Electoral) ha declarado por unanimidad que la convocatoria a las elecciones internas del PAC, convocadas para el día domingo 9 de abril es

nula. Mismas que son convocadas por la dirección del partido para elegir a los delegados para la asamblea general, comités departamentales y comités municipales.

Ante tal hecho el TSE emitió una declaratoria que entre otras cosas manifiesta: “PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado por las personas que fungen de hecho, por haber vacado el doce (12) de diciembre de dos mil dieciséis, como Consejo Nacional del Partido del Partido Anticorrupción de Honduras y por la Junta Receptora de Documentos...”.

Lo anterior permite al gobierno, a través del TSE intervenir de forma directa en la organización del Partido Anticorrupción (PAC).

Desde el Partido Socialista Centro Americano (PSOCA) planteamos que solo la movilización nacional podrá detener a JOH y su fraude. ■



a pie juntilla la política del imperio.

Los escándalos de corrupción de la dirigencia del Partido Nacional y personas muy allegadas al presidente, le han generado mucha impopularidad en la población, los problemas económicos familiares angustian a las familias y los programas sociales no son lo suficiente para endulzar a las mayorías, programas que solo van dirigidos a ese votante nacionalista. Sin embargo, estos hechos no han sido lo suficientemente de peso para tambalear la caída del mismo, con todo un engranaje institucional a favor, con la pasividad de la oposición y con la doble moral estadounidense, JOH avanza hacia 4 años más en el solio presidencial.

Lo que mantiene a flote a JOH son los mismos dirigentes de la oposición, quienes se niegan a movilizar a las bases, principalmente la dirección del Partido Liberal que sigue siendo la columna de



LA NICA ACT II: MAYORES PRESIONES PARA NEGOCIAR LA REFORMA DEL RÉGIMEN BONAPARTISTA

Por Sebastián Chavarría Domínguez

El año pasado, casi al terminar el periodo de sesiones del Congreso de los Estados Unidos, los representantes de las bancadas del Partido Demócrata y el Partido Republicano se pusieron de acuerdo en impulsar un proyecto de ley conocido como Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), conocido como NICA ACT. Esta fue una repuesta calculada al progresivo endurecimiento del régimen bonapartista de Daniel Ortega, que había liquidado las opciones electorales de la oposición burguesa y destituido a los diputados críticos antes de las elecciones generales de Nicaragua en Noviembre del 2016

Al no haber discrepancias entre las bancadas republicana y demócrata, el proyecto fue aprobado automáticamente, sin discusión en la cámara de representantes y del Senado, y solo quedaba pendiente la promulgación por parte del presidente Barack Obama, algo que no ocurrió porque este se encontraba sumamente debilitado al final de su segundo mandato y por la misma dinámica de la campaña electoral en Estados Unidos, cuya polarización relegó el debate

sobre las denuncias de instauración de un régimen dictatorial en Nicaragua. El triunfo electoral de Trump cambió radicalmente el panorama político a nivel internacional y anunció una redefinición de las relaciones "amistosas" entre el gobierno de Ortega y la nueva administración en Estados Unidos.

Daniel Ortega, un astuto viejo zorro de la política, adelantándose a los acontecimientos, hizo varias maniobras y concesiones, como aceptar la observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en aras de lograr una renegociación aceptable con Estados Unidos, restableció las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, condenó

el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte, etc, pero la reciente introducción de un nuevo proyecto de NICA ACT II nos indica que el imperialismo norteamericano ha endurecido su posición en torno al régimen político bonapartista de Daniel Ortega.

1.- Consolidación y crisis del régimen bonapartista

Después de su retorno al gobierno en enero del 2007, Daniel Ortega inició un rápido proceso de concentración de poder, primero apoyándose en las omisiones del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y las vacilaciones del Partido Liberal Independiente (PLI) en manos de Eduardo Montealegre. Jugando a discreción con la división del liberalismo, Ortega instauró



un régimen bonapartista sin necesidad de reformar la Constitución, sino hasta el año 2014 cuando ya estaba consolidado su control absoluto sobre todas las instituciones del Estado, incluido, por supuesto, el Ejército Nacional (EN) y la Policía Nacional (PN)

Este proceso fue posible, como ya hemos explicado con anterioridad, por una combinación de factores nacionales e internacionales. A nivel interno, la derrota de la revolución produjo un cansancio en las masas, sedientas de orden, tranquilidad y necesidad de trabajo. La polarización política de 1990, que condujo al posterior triunfo de Arnoldo Alemán en 1996, se disolvió en la

medida en que avanzó la reconstrucción de la economía capitalista. En el periodo 1990-2006 se aplicaron durísimos planes de ajuste que provocaron descontento social y ansias de cambio. La conducción del FSLN, de manera astuta, supo aprovechar todas estas contradicciones hasta recuperar finalmente el gobierno en 2007.

La estrategia de "diálogo y consenso" entre el FSLN y los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) dejó huérfanos a los partidos de la oposición burguesa: se quedaron sin discurso político, sin programa económico (Ortega ha aplicado al pie de la letra los planes del FMI) y sin el vital financiamiento para las campañas electorales.

A nivel internacional, influyó la crisis del imperialismo norteamericano y el ascenso de los gobiernos populistas de izquierda en América Latina. No se puede comprender la consolidación del régimen bonapartista en Nicaragua sin la copiosa ayuda petrolera venezolana, aportada por el chavismo, que ascendía a un promedio de 500 millones de dólares. Pero este dinero no era gratis, eran prestamos muy blandos, que le aportaron al gobierno de Ortega el dinero necesario para montar planes de asistencia social, para consolidar el voto entre los sectores sociales más pobres, al mismo tiempo que iniciaba un extraordinario proceso de acumulación originaria de capital.

2.- Una acumulación originaria y extraordinaria de capital

La burguesía sandinista emergió de la derrota de la revolución, privatizando de manera rápida y discrecional los bienes confiscados al somocismo, que eran propiedad estatal. Muchos sectores de esta nueva

Pasa a la pagina No 16